

EL ESPECTADOR

FUNDADO EN MEDELLÍN EN 1887 POR FIDEL CANO

El Espectador trabajará en bien de la patria con criterio liberal y en bien de los principios liberales con criterio patriótico. **Fidel Cano**

Gerente **Eduardo Garcés López** Director **Fidel Cano Correa**

Consejo Editorial

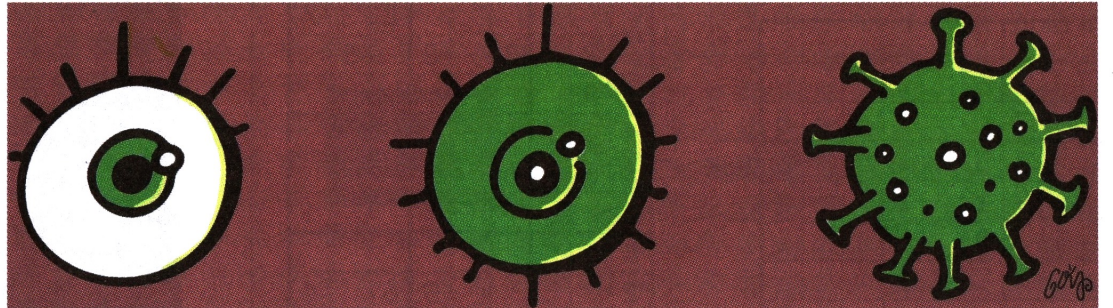
Presidente **Gonzalo Córdoba Mallarino**

Pilar Reyes, Héctor Abad Faciolince, Ramiro Bejarano, Armando Montenegro.

Editor General **Jorge Cardona**

Vicepresidente Comercial **Caracol Unidad de Medios**
Mauricio Umaña Blanche

Gova



¡OJO!

Opinión

Directores: **Fidel Cano Gutiérrez**: 1887 - 1919. **Luis Cano**: 1919 - 1949. **Gabriel Cano**: 1919 - 1923 (Medellín) y 1949 - 1958. **Guillermo Cano**: 1952 - 1986. **Juan Guillermo y Fernando Cano**: 1986 - 1997. **Rodrigo Pardo**: 1998 - 1999. **Carlos Lleras de la Fuente**: 1999 - 2002. **Ricardo Santamaría**: 2003. **Fidel Cano Correa**: 2004 fidelcano@elespectador.com

El Espectador. Editado por Comunican S.A. ©. Miembro: SIP, WAN, IPI y AMI
© Comunican S.A. 2020, Todos los derechos reservados.
ISSN 0122-2856. Año CXXXII. www.elespectador.com

Alerta roja en Estados Unidos

LA DEMOCRACIA MUERE DE MUCHAS maneras. Pero una muy común es aquel lento desmantelamiento de las instituciones, que va acompañado de un cambio gradual en las posturas del régimen autoritario, hasta que de repente el balance de poderes desaparece, las reglas se desobedecen y el orden establecido es reemplazado por caprichos. Lo hemos visto en países de todo tipo. Ahora lo estamos viendo en Estados Unidos.

Tal vez es difícil dimensionar la gravedad de la presidencia de Donald Trump porque a todo momento parece una caricatura. Sus decisiones, sus declaraciones, sus peleas, no dan la sensación de hacer parte de un plan maestro orquestado para derribar los pilares de la democracia estadounidense, sino los caprichos de un multimillonario arrogante que quiere toda la atención del mundo para él y sus deseos. Era más fácil burlarse del Trump candidato que tomárselo en serio y así logró ganar. Durante los primeros años de su presidencia, era más sencillo ver a un líder sin experiencia y errático que no sabía muy bien qué estaba haciendo. Pero este año la máscara ha caído. Puede ser que los arrebatos de Trump sean improvisados, pero su objetivo es claro: quiere el poder para sí y para todos sus

aliados. Incluso a costa de la Constitución.

Tal vez lo más decepcionante de la situación en Estados Unidos es ver cómo el Partido Republicano, que sobre el papel defiende la democracia, la libertad y las instituciones, ha bajado la cabeza ante los atropellos de Trump. Para ellos, el cálculo es claro: el mandatario les sirve para avanzar sus agendas conservadoras. Pero la política sin principios es mezquindad, más cuando lo que está en juego es la democracia del país más poderoso del mundo. No hay excusas para seguir a su lado.

Y aun así, ahí siguen. Hace cuatro años, faltando nueve meses para elecciones, Barack Obama intentó llenar un espacio vacío en la Corte Suprema de Justicia. Los republicanos se opusieron, argumentando

“¿Qué más alertas rojas se necesitan para ver que la democracia de Estados Unidos está en peligro de muerte?”.

que no debería tomarse una decisión trascendental en un año electoral. Ahora, a dos meses de las elecciones presidenciales, esos mismos republicanos están haciendo todo lo posible para aprobar a una nueva magistrada e inclinar más la balanza del tribunal hacia los conservadores.

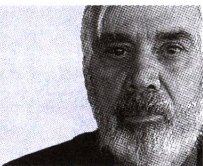
Un último ejemplo. Ayer, *The New York Times* publicó las declaraciones de renta de dos décadas de Trump. Encontró que pagó apenas \$750 en impuestos el año que ganó la presidencia. En los quince años anteriores, hubo diez en los que no pagó ni un dólar supuestamente por pérdidas. En contraste, Joe Biden pagó casi US\$4 millones en impuestos en un solo año. Además, hay pistas de que Trump ha buscado evadir sus responsabilidades con el fisco. El reportaje cuenta que la agencia encargada de los impuestos está considerando auditar al presidente. Pese a esto, ya sus aliados republicanos salieron a defenderlo.

Hace poco, Trump dijo que no estaba seguro de entregar el poder así perdiera las elecciones. Ha utilizado todas las formas para desacreditar los futuros resultados, hablando de un presunto fraude y de una conspiración. ¿Qué más alertas rojas se necesitan para ver que la democracia de Estados Unidos está en peligro de muerte?

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com

Qué pasa con el gas

SALOMÓN KALMANOVITZ



LA ESTUFA DE LOS COLOMBIANOS ha pasado de ser alimentada por carbón vegetal, o el olvidado cocinol, a la electricidad más cara y al gas domiciliario más económico. Existe una producción nacional de combustible, proporcionada por Ecopetrol y otras empresas medianas y pequeñas que exploran, lo extraen y lo transportan. El informe de Naturgas “Indicadores 2019” anuncia que “Colombia tiene un potencial de hasta 54,7 TPC (terapiés cúbicos), lo cual equivale a multiplicar por casi 18 las reservas probadas actuales que tiene Colombia”.

Esta producción está amenazada por las plantas de regasificación —una en Cartagena y otra prevista en Buenaventura—, que procesan las importaciones de Estados Unidos y encarecen las tarifas residenciales. Se afecta en especial a los estratos 1 y 2 de la población, que pagan hasta el doble del costo del combustible: mientras que las regasificadoras cobran entre US\$7 y US\$8 por pie cúbico, los productores locales cobran US\$4,5. El negocio es posible

gracias a la regulación del Gobierno, que favorece a los importadores de gas, perjudica a los usuarios y amenaza el futuro de la industria nacional.

Los productores locales le aportan al país regalías, impuestos y adquisición de bienes y servicios por casi US\$300 millones al año, más 10.000 empleos directos de personal calificado. Las regasificadoras no aportan ni un peso y muy pocos empleos; por el contrario, deben ser subsidiadas por los consumidores de energía eléctrica y gas.

La planta regasificadora de Cartagena es de Spec y Promigás, la segunda de propiedad del grupo de Sarmiento Angulo. Según su *brochure*, “suministramos el gas natural a más de 3,6 millones de usuarios, 40 % del mercado nacional, que representa 12 millones de personas”. A estos ciudadanos se les cobra la mitad del costo de regasificación según resolución de la Comisión Reguladora de Energía (CREG).

La planta de Cartagena opera por debajo de su capacidad, con unos costos elevados, que son absorbidos por los sobrepagos mencionados. En vez de proteger a los consumidores y a la producción nacional, dominada por la empresa estatal, el Gobierno favorece a los importadores del gas extraído por *fracking*, que terminan haciéndoles competencia desleal a los

productores y atentan contra la autosuficiencia energética nacional.

Lo que se viene hacia el futuro puede ser peor y más absurdo que el negocio de Cartagena. A principios de 2021 piensan licitar una enorme planta de US\$800 millones en la bahía de Buenaventura, donde no cabe físicamente y perjudica el medio ambiente y la seguridad nacional; en efecto, comprometería una base de la Armada Nacional situada no lejos de ella, por los peligros que entraña el almacenamiento de gas y, además, atascaría el tránsito marítimo del primer puerto del país. Para rematar, se iniciaría sin el oleoducto entre la planta y Yumbo, lo que implicaría remontar la cordillera occidental y atravesar territorios hostiles densamente poblados, con unos enormes costos adicionales.

Hoy el país está cruzado por miles de kilómetros de gasoductos que llevan el combustible extraído de yacimientos convencionales (Cupiagua, Cusiana y mar Caribe) de Ecopetrol, que aporta el 60 % del consumo nacional, y de otras empresas, que cubren el 30 %, de modo que hoy se importa el 10 %. Lo que pretenden los importadores con el elefante blanco de Buenaventura es quedarse con el 40 % del negocio, expoliar a los consumidores y arruinar a las empresas gasíferas productivas.

Nieves

